

Documento

Una opción democrática desde la sociedad dominicana del siglo XXI

Opción Democrática



Fotografía: Elvis González Comprés

1. Los desafíos del momento

En el sistema político dominicano se identifica una nueva fase de su crisis de legitimidad, expresada en la negación de los partidos tradicionales a conformar una institucionalidad democrática que combine un crecimiento económico con un desarrollo social que responda a las aspiraciones de las grandes mayorías.

Vivimos en una sociedad con grandes desigualdades que se reproducen a través de equilibrios precarios e inestables y mediante repartos de privilegios, con un sistema de clientelas que neutralizan políticamente amplios sectores sociales y económicos.

Leonel Fernández se ha convertido en el mediador principal del poder, sustituto de los viejos caudillos, concentrando en su persona todos los poderes del Estado a partir de la corrupción pública, el narcotráfico y una sofisticada red mafiosa. Su liderazgo se sostiene a partir del control y la manipulación de la opinión pública usando de manera inescrupulosa e ilegal los medios masivos de información.

Las elecciones congresuales y municipales de mayo 2010 significaron un punto de inflexión en el sistema político que repercutirá en una nueva recomposición de los dos partidos tradicionales PLD-PRD.

El PLD, con su discurso de progreso agotado, y con una mayoría mecánica en el Congreso, infunde temor y desconfianza en importantes segmentos económicos, sociales y democráticos, lo que se agrava por la tendencia a la continuidad de Leonel Fernández, quien domina la Junta Central Electoral y cuenta con un poderío económico proveniente de la corrupción pública y de la penetración en negocios que hasta ahora no constituían espacios propios de la clase política.

En paralelo, los movimientos populares, caracterizados por una irrupción coyuntural en la escena social aun con momentos destacados como las luchas del 2009, muestran limitaciones para insertarse en el espacio político en el marco del sistema democrático y, por el contrario, expresan rechazo a las posibilidades de mejorar las condiciones de vida con su transformación.

De esta manera estos movimientos se constituyen teniendo como horizonte una política de la impotencia, de escasez propositiva enclavada en el pasado, lo que conlleva a que, a pesar del desprestigio del bipartidismo dominante PLD-PRD, el desencanto de las grandes masas se mantenga varado entre el escepticismo (abstencionismo electoral) y las redes del clientelismo, que han penetrado no sólo los sectores populares, sino también la clase media y los círculos intelectuales.

La ausencia de alternativas conduce a las grandes mayorías a la reproducción inmediata de su vida económica que se traduce en desmovilización política, en miedo difuso, apatía y refugio en los intereses individuales, produciendo todo esto una carencia de perspectiva sobre el futuro.

No obstante, la sociedad dominicana, en sus sectores más dinámicos, sigue aspirando a la democracia, a un gobierno eficiente y eficaz, a mayores niveles de desarrollo en la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la igualdad de oportunidades y la prosperidad, aspiración que se comprueba en las tendencias de las encuestas realizadas durante el año 2009, donde la mayoría, además de expresar confianza en la democracia, consideró que la economía iba por un mal camino y que la corrupción es generalizada en todas las instituciones públicas.

Asimismo, el 55% de la población se mostró decepcionada de los partidos tradicionales, dato que aporta a la comprensión de la abstención en las pasadas elecciones.

Uno de los grandes desafíos del momento está en la búsqueda de una relación adecuada entre nuestra herencia del pasado, los retos del presente y una propuesta de futuro, para salir de la situación actual que parece conducirnos hacia el “eterno retorno de lo mismo”.

2. Otros referentes de la democracia

Ante la tendencia de ilegitimidad que arrojan los resultados electorales de mayo 2010, habría que evitar el tradicional rechazo a la democracia que primó tras el golpe de Estado al gobierno de Bosch en 1963 y que todavía perdura en algunos sectores políticos.

La sociedad del Siglo XXI tiende a afirmarse en gobiernos democráticos escogidos a través de procesos electorales. Los principales cambios en América Latina van en esa dirección (Brasil, Uruguay, El Salvador). La lucha política en la sociedad globalizada se desarrolla a través de la conquista de espacios de poder y de demandas de mayor ética y transparencia, más igualdad, mejor justicia y más respeto al medio ambiente.

Al mismo tiempo, la agenda actual está marcada por el rechazo a todo tipo de discriminación étnica, social, sexual, religiosa, lo que ha dado lugar a un relevante ciclo de movilizaciones cuya potencia social reside en la existencia de actores múltiples, conformados por numerosos movimientos que articulan lo local y lo sectorial con lo global, sobre la base de causas comunes sin la pretensión de un proyecto colectivo totalizador.

Esto se expresó en las luchas sociales del 2009, que mostraron una extraordinaria riqueza en participación. Huelgas, plantones, peregrinajes, caminatas, protestas barriales y regionales tuvieron en común una propensión a que las decisiones se tomaran desde quienes integran los procesos, lo que se manifestó en las movilizaciones contra el retroceso constitucional (los derechos de las mujeres, el respeto al medio ambiente, los derechos sexuales y generacionales) y las demandas territoriales de carreteras, energía eléctrica, agua potable, educación, salud, seguridad ciudadana, entre otras.

Ese *movimiento de movimientos* reveló una específica modalidad de realizar la democracia como ampliación del espacio público, convirtiendo la calle en escenario de la sobrevivencia y de las luchas sociales, como una creación común de esa significativa potencia social. Se trata de un proceso que emerge desde la sociedad misma y que se articula por fuera de lo “político”, desde lo espontáneo, desde el terreno de la vida y desde la lucha permanente por mejorías en las condiciones y la calidad de vida de la población.

Las movilizaciones sociales del 2009 y las contradicciones en la Asamblea Revisora, obligaron al bipartidismo dominante al denominado *Pacto por la Reforma Constitucional*, iniciativa del presidente de la República en un momento en que las protestas crecían, se agudizaba la crisis financiera internacional y se registraba una baja en el índice de popularidad del gobierno de Fernández instalado en 2008. Como agregados de la situación resaltan el déficit fiscal causado por el despilfarro económico y los altos costos de la reelección presidencial, conjuntamente con la ausencia de respuestas al desarrollo social.

El pacto Leonel-Miguel se convirtió en un muro de contención a las movilizaciones y protestas sociales del 2009. Las reformas (reforma constitucional, ley de partidos) vendrían ahora condicionadas por el interés particular y continuista de Leonel Fernández y su grupo en el PLD.

Desde la sociedad no se pudo articular una propuesta electoral que pudiera combinar la democracia representativa con la directa, hubo resignación, duda, temor, desconfianza y las trampas del pasado volvieron a bloquear las posibilidades de una alternativa política.

Con tanta dispersión y confusión los resultados no podían ser otros que no fueran la ausencia de una representación política significativa del movimiento social autónomo en las elecciones congresuales y municipales.

Frente al desaprovechamiento de la potencia social del 2009, se hace necesario retomar el camino de la movilización social y de la combinación de la democracia representativa con la democracia directa, a través de fórmulas creativas con capacidad crítica y propositiva. Se impone profundizar la democracia exigiendo que las decisiones colectivas se tomen con base en la igualdad política, con respeto de las minorías y los procedimientos legales del Estado de derecho.

Ante el autoritarismo constitucional de Leonel Fernández, quien se encuentra a la cabeza del bipartidismo dominante, se requiere que nos movilizemos y exijamos más democracia.

En ese marco, el movimiento social y político autónomo está desafiado a reencontrarse y, desde la defensa de los derechos colectivos y la reivindicación de las garantías democráticas, exigir un proceso electoral en igualdad de condiciones.

Se amerita un nuevo ordenamiento jurídico que contemple una fiscalía electoral con autonomía administrativa, con capacidad de perseguir y someter a quienes cometan delitos electorales como el transfuguismo, la compra de votos, el uso de los recursos del Estado y la propaganda política antes de comenzar la campaña o en el día de las elecciones.

La nueva legislación debe establecer, además, requisitos más flexibles para la legalización de partidos y movimientos locales y regionales, eliminación del sistema de arrastre, una mayor garantía de la participación de las mujeres no sólo en la boleta sino también en los resultados comiciales, y una representación en la Junta Central Electoral de todas las fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias para desarticular el secuestro y el monopolio electoral de los dos partidos tradicionales.

3. Una opción política con capacidad de poder

Una de las principales lecciones de las pasadas elecciones es la necesidad de una organización de carácter político y de naturaleza democrática que pueda ser la expresión y representación de un movimiento autónomo.

Esta organización debe articularse teniendo como ejes fundamentales: 1) La participación social transversal que involucre la mayor cantidad de sectores y de intereses comunes, 2) Una agenda mínima de definiciones programáticas y de valores compartidos y 3) Un aparato electoral capaz de utilizar de manera eficiente y eficaz las herramientas modernas de la política contemporánea.

Para el logro de estas metas se requiere contar con recursos económicos para mantener una estructura mínima (no burocrática), locales, redes sociales, publicidad y voluntariado como garantía y eficacia de una fuerza política con capacidad de competir con los partidos políticos dominantes.

Se trata de una organización democrática, donde las decisiones estratégicas sean colectivas, a través de la regla de la mayoría, con un espíritu de crítica y autocrítica y respetando las posiciones contrarias y de las minorías, entendiendo que debe primar el respeto a la institucionalidad y a los planes de acción.

Es vital potenciar y reconocer liderazgos incluyentes, no totalizadores, garantizando su circulación y alternancia, combatiendo el mesianismo y el fundamentalismo.

Una opción política de este tipo supone y estimula la articulación de movimientos locales independientes a nivel nacional y alianzas políticas que pudieran ser coyunturales o que pudieran devenir en permanentes.

Hay que tomar en cuenta la realidad concreta en que nos movemos, no la sociedad ideal que quisiéramos tener, lo que implica agudeza y sentido práctico sin descuidar ni violentar los principios y valores fundamentales, esto por la urgencia de reinventar fórmulas de alianzas plurales, con la izquierda, con liberales, con parte del empresariado y con sectores de la sociedad civil.

Esta organización tiene y debe emprender la tarea más urgente de la coyuntura

política actual, ofrecer respuestas permanentes frente al bipartidismo dominante, con propuestas viables y lucidez intelectual y, sobre todo, con vocación de poder.

Estamos retados a forjar una mayoría democrática que trascienda el idealismo utópico y el pragmatismo oportunista, que asuma los desafíos de un crecimiento económico con igualdad y justicia social.

Alexis Álvarez, Ana Feliz Lafontaine, Alfonso Torres, Alexander Mundaray, Carlos De Peña Evertsz, Claudia Lizardo Artiles, Darío García, Juan Miguel Pérez, Olaya Dotel, Pedro Catrain, Pedro Pablo Yermenos, Salvador Catrain, Tania Hernández, Ramón Álvarez, Randy Custodio